

especial para *El Norte*, edición del 9 de agosto de 1992

Baja California, Durango, Michoacán:  
dolencias de la democracia electoral

miguel ángel granados chapa

Hace ya un mes que se efectuaron las elecciones locales en Michoacán, y la dolencia que produjeron sigue viva y punzante. Y a ella se han añadido otras, causadas por los comicios del dos de agosto. Y es que, a pesar de algunos avances en los mecanismos electorales, la situación de fondo sigue siendo la misma que hace treinta y veinte y diez años: un partido estatal, dominante, todopoderoso, rige un sistema electoral que lo favorece, y contra el cual luchan con diversos grados de éxito las fuerzas creyentes en que la democracia exige, por lo menos, equidad entre partidos en el sistema electoral.

Como lo previmos hace dos semanas, las entidades donde se produjo un cotejo de fuerzas más parejo, fueron Baja California y Durango. De ser ciertas las denuncias priístas en el primer caso, y de no ser grave la situación que de ello se derivara, podría decirse con una sonrisa maliciosa que el partido oficial está recibiendo una sopa de su propio chocolate; que ahora sabe cómo se las gastan las autoridades que actúan con ánimo partidario y no con imparcialidad; y que el PAN-gobierno es sólo una versión distinta del PRI-gobierno. Pero colocados en la perspectiva de seriedad con que es preciso abordar este asunto, debe decirse que el gobierno panista enseñó como se pueden organizar elecciones con apego a derecho. Los alegatos priístas derivan, sólo, de su dificultad para vivir fuera del aparato estatal, de su necesidad de petardear la credibilidad de la administración panista, y de los intereses particulares de los jefes de ese partido en la entidad.

Esto último tiene importancia. Los adversos resultados que el PRI está resintiendo en Baja California surgen de la capacidad panista para ganar votos y para evidenciar que los obtuvieron, pero también de una fuerte pugna interna en el PRI. Haga usted sus propios cálculos: el coordinador priísta en la entidad es Orlando Arvizu, un ex diputado que fue secretario de prensa del comité nacional priísta encabezado por Luis Donald Colosio, con cuyo interés sigue vinculado. Arvizu dijo que Borrego tiene la culpa de los resultados adversos, porque anticipó que el PAN podía ganar, a dos días de que se efectuaran las elecciones. Borrego, por supuesto,

no hizo tal cosa. Peo Zeta, el semanario dirigido por Jesús Blancornelas, interpretó como dicho por el presidente priísta lo que se dice en un documento de ese partido, filtrado muy probablemente por el secretario de Acción Electoral, el diputado chiapaneco César Augusto Santiago, al que por eso a estas horas deben haberle ya pedido la renuncia. Por si fuera poco, su segundo de a bordo, el subsecretario de Acción Electoral y diputado bajacaliforniano, Amador Rodríguez Lozano, acaba de recibir un portazo en la nariz propinado por sus propios compañeros. Boquiflojo y prepotente, Rodríguez Lozano anunció que su partido recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a impugnar el proceso electoral en su tierra. Antes de 24 horas estaba siendo desautorizado por el comité nacional de su partido. Por un lado, era preciso subsanar el error de un despechado que anuncia el empleo de instrumentos que su partido ha censurado, y que además en caso de ser realmente usados podrían ser contraproducentes. Por otra parte, se aprovecha el pretexto para imponerle un tapabocas, que sea el preámbulo de su defenestración, junto con la de su jefe y amigo César Augusto Santiago. Pero el PRI no padece sólo esa división. También están presentes en la entidad los intereses del secretario de Educación Pública, al que se reputa oriundo de este lugar y hace sus pininos como cacique electoral. Eso, al menos, es lo que se desprende del modo en que el líder del priísmo local se refiere a él. Asegura que sólo obedece órdenes del jefe Zedillo.

Más allá del chismorreo en la cocina priísta, está la realidad electoral. En Baja California Acción Nacional se ha consolidado como partido gobernante. El triunfo de 1989 no fue casual, como se va viendo ahora, o fue bien aprovechado. El año pasado el PAN logró en esa península un triunfo opuesto a la tendencia general que en todo el país favoreció al PRI. El resultado fue significativo, pero no anunciaba cabalmente lo que aconteció el domingo pasado. De haber vivido bajo los cánones tradicionales, el PRI habría recuperado las alcaldías perdidas hace tres años, y reconquistado plenamente la legislatura local, para ostentar de nuevo su condición de partido dominante. Pero esa corresponde ahora a Acción Nacional, que no sólo mantuvo bajo su administración las alcaldías de Tijuana y Ensenada, sino que avanzó a Tecate. Y si bien no conservará la facilidad legislativa que hasta ahora lo benefició, no sucumbió ante la aplanadora que en otro tiempo fue el partido oficial.

Por desgracia, ese avance en la disputa de la sociedad contra el partido estatal se está viendo nublado por las resistencias del priísmo a acatar los resultados de las urnas. No han faltado acciones violentas, que pueden multiplicarse, para generar un clima que haga reproducir las

a modificar su rutina, y canceló la ceremonia en que debía haber rendido su último informe de gobierno. Todo estaba listo para que lo hiciera el sábado 8. Las invitaciones se habían remitido, la propaganda se había distribuido, y se sabía que el enviado presidencial era el secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso. Pero ante la inminencia de una protesta masiva contra el gobernador, semejante a la que aturrulló en septiembre de 1991 a Leopoldino Santos en San Luis Potosí, donde se produjeron zarandeos, ayer no hubo informe a la usanza tradicional.

Sea que la proposición de cotejar actas surgiera de una actitud de honestidad política, y en los mismos términos hubiera sido aceptada, sea que se tratara de una táctica dilatoria, unilateral o establecida como un valor entendido, lo cierto es que ese mecanismo se frustró. Era impracticable, pero denotaba una voluntad de transparentar los resultados. No habiéndose realizado, el problema electoral sigue vigente (pues el Congreso estatal está apenas a punto de reunirse para calificar su propia elección y la de gobernador) y se ha avivado el problema político que consiste en hacer que coexistan fuerzas políticas antagónicas y potentes. En realidad, este último calificativo puede aplicarse sólo al perredismo, que tiene una capacidad real de movilización. "Con sólo el diez por ciento de ellos que estén en pie de lucha --calculó un eminente priísta--, el problema es mayúsculo". Y aunque no lo estuvieran, la existencia de una corriente política dotada de esa densidad humana introduce un factor que no se puede manejar con los criterios tradicionales. Claro que conforme a la ley la minoría debe acatar el dictado de la mayoría. Pero cuando ésta se ha formado con procedimientos puestos en entredicho, la verdad es imposible de conocer. Por eso se abre paso la idea de que habrá un gobernador interino, que no pertenezca al PRI ni al PRD, para que la solución no sea copia calcada de Guanajuato o San Luis Potosí.